

Palabras preliminares

Claudia Korol

El ADN del Cóndor y la criminalización de los movimientos sociales

El libro que editamos está escrito por un militante campesino, Agustín Acosta, perseguido en su tierra por ser un luchador por los derechos del pueblo, y preso político en Argentina.

Su encierro en la cárcel de Marcos Paz, junto a sus compañeros, también líderes del Movimiento Agrario Paraguayo: Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Simeón Bordón y Gustavo Lezcano, es una afrenta a la justicia; y es un fuerte agravio a los luchadores del pueblo hermano.

En este hecho, además de las marcas de la injusticia contra los pobres -inherente al sistema de dominación-, se puede descubrir, si investigamos un poco más, que el ADN del Plan Cóndor

sigue presente en las nuevas modalidades de coordinación de las fuerzas represivas latinoamericanas, como un gran pacto invisible que sobrevuela nuestra soberanía, vigilada y controlada desde el norte.

También puede constatararse que la criminalización de los movimientos sociales es un mecanismo que está a la orden del día, y que constituye una modalidad de actuación del poder que debe ser puesta más enérgicamente en el debate de las fuerzas populares, para poder desarticularlo.

No haré el detalle de los hechos que llevaron a la captura de los seis campesinos paraguayos, presos políticos en Argentina, porque esto queda muy claro en el relato del libro, y también en el prólogo realizado por la periodista Stella Calloni. Solamente quiero subrayar que fueron acusados de un crimen que no cometieron: el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas Grau. Un secuestro que, como tantos otros crímenes que sacuden a ese país, es producto de los ajustes de cuentas entre las distintas fracciones del poder local. Este crimen fue realizado por un poder mafioso que no sólo es asesino sino también corrupto, y que maneja todos los hilos del Paraguay, desde la política hasta los medios de comunicación, desde las fuerzas represivas hasta las instituciones judiciales. Y que así como hoy se ha puesto en marcha para que el pase de facturas entre ellos pudiera tener como valor agregado una brutal persecución al movimiento campesino, y al parti-

do político Patria Libre; también está siendo utilizado para desacreditar a toda fuerza opositora, y en especial a la que hoy amenaza su gobernabilidad: la alianza encabezada por el ex obispo Fernando Lugo.

El defensor de los derechos humanos Martín Almada, una de las víctimas del Plan Cóndor, que luego descubrió sus archivos, y recibió el Premio Nobel alternativo que otorgan los movimientos populares, escribió en una carta al juez argentino Ariel Lijo (que es quien dictaminó en primera instancia su extradición): "Estos compatriotas cometieron la osadía de reclamar el cambio. El gobierno de Nicanor Duarte Frutos no sabe interpretar los signos de los tiempos; por eso arremete con furia contra estos valientes compañeros. Ellos reclamaron con justicia transparencia, participación y mejor distribución de la riqueza. La respuesta fue la persecución política a pesar de haber sido declarados inocentes por el Juez Penal más respetado del Paraguay, por su solvencia moral e intelectual, Dr. Pedro Mayor Martínez. En el Paraguay tenemos hoy un gobierno fascista que no ofrece ninguna garantía a los extraditables líderes campesinos porque saca a las calles tanto al Ejército como a la Policía, le gusta bañarse de sangre y revolverse en el discurso democrático. Penaliza las protestas sociales y legitima la violencia. Usted al conceder la extradición por lo visto no tuvo en cuenta nuestros argumentos sino una vez más las razones de los poderosos".

Visité Paraguay en el año 2006, en el marco de la Misión Internacional de Observación sobre las actividades de las tropas estadounidenses, y regresé en los primeros días de marzo del 2008, invitada a un Seminario de la Juventud de Tekojoja (la fuerza política recientemente constituida alrededor de la figura de Fernando Lugo).

En el 2006 quedé impresionada por el nivel de represión que se desarrollaba contra las organizaciones populares –especialmente campesinas– y por la tremenda impunidad con que se asesina, se tortura, se lesionan los derechos de un pueblo que, por su parte, da muestras de valor, de coraje, de dignidad frente a tanta agresión. La presencia militar norteamericana abierta, entonces, era un factor que reforzaba e incrementaba notablemente la sensación de militarización y violencia atravesando todas las dimensiones de la vida cotidiana. El ataque a las organizaciones campesinas y a los movimientos populares, era moneda corriente, protegida por un sistema de complicidades y lealtades que envuelve todos los estamentos del poder, aliados en la aplicación de las medidas del Plan Paraguay, correlato del Plan Colombia (para el cual muchos represores y muchos jueces y miembros del sistema político recibieron cursos en Colombia, con asesoramiento norteamericano).

Para la geopolítica de la hegemonía norteamericana, Paraguay es una pieza clave de dominación en el Cono Sur; un lugar para establecer bases militares, para proteger sus acciones criminales,

y para amenazar a los pueblos de la región, y a una perspectiva de integración latinoamericana.

Cuando regresé a Paraguay en los primeros días de este año, volví a sentir y a observar el impacto de esta política de persecución hacia los sectores populares organizados, pero también pude ver algo diferente. Se empieza a creer en la posibilidad de que el andamiaje levantado por Stroessner y sus sucesores del Partido Colorado, pueda ser desmontado. La articulación de fuerzas políticas y sociales producida alrededor de la figura de Fernando Lugo, ha levantado esperanzas en diversos sectores. Esperanzas, no exentas de desconfianzas. Pero se va sintiendo que tal vez sea posible quitar terreno para esta gran plataforma de apoyo al imperialismo que era hasta el momento el Paraguay.

Es innegable que los obstáculos para que se concrete esta esperanza son mayúsculos. No sólo porque el Partido Colorado es un especialista en “megafraudes”, sino también por la guerra sucia que han venido desarrollando contra las fuerzas opositoras, que incluye campañas de desprestigio como la que vienen realizando, utilizando una vez más el secuestro de Cecilia Cubas, para intentar implicar a los líderes de Tekojoja y al propio Fernando Lugo en el mismo. Lo que resulta más indignante es la impunidad con la que hacen las imputaciones desde los grandes medios de comunicación. Y cuesta creer también la tranquilidad con que se desarrollan campañas de infundios, como aquella que se desarrollaba en es-

tos días, donde proliferaron afiches que decían “el secuestro tiene cura”.

Visto desde esta perspectiva, los seis campesinos presos en Argentina, como los tantos presos en Paraguay, se vuelven rehenes de un régimen que los encarcela como factor de presión, y que en el momento que considere más oportuno los presentarán como cara del “peligro terrorista” que “amenaza” a toda la sociedad paraguaya. Argumento con el cual, seguramente, podrán desatar nuevas razzias y persecuciones, legales o ilegales, por parte de los numerosos grupos paramilitares que actúan en ese país.

No en vano han pretendido establecer las supuestas relaciones del movimiento campesino paraguayo con las FARC de Colombia. La estigmatización, la criminalización, tienen argumentos comunes en todo el continente. El libreto viene desde el Norte.

En resumen el libreto es el siguiente: los sectores del poder producen el crimen, en el cual realizan algún ajuste interno de cuentas, y después, inmediatamente, lo utilizan para dar consenso a las políticas de criminalización de los movimientos populares, y un poco más: para intentar arrebatarse a una fuerza opositora, la posibilidad de la victoria. El “cuco” son las FARC, cuando no aparece el fantasma de Osama en algún rincón de la Triple Frontera. Mientras tanto, los narcos cultivan, procesan droga, la transportan, y lavan el dinero, con absoluta impunidad, en establecimientos con guardias armadas privadas. El po-

der, no los ve. O tal vez, ellos son parte del poder, junto con los grandes ruralistas, los “empresarios” –como los llama el investigador paraguayo Tomás Palau–, la oligarquía paraguaya y brasileña –que tiene una parte del país bajo su mando-. Todos estos elementos tal vez sirvan para pensar los límites de un sistema que se autodenomina como democrático.

Lo más importante, cuando analizamos la nueva situación política en Paraguay, es la posibilidad que abre la creación de una fuerza sumamente heterogénea articulada alrededor de Fernando Lugo, de que se pueda derrotar las políticas fuertemente autoritarias del partido Colorado y de sus funcionarios, y que a partir de ahí pueda motorizarse la creación de nuevos factores de poder popular, que devuelvan al Paraguay su lugar en América Latina, que ha sido violentamente reducido desde la guerra de la Triple Alianza. La novedad se encuentra en el hecho de que una parte del pueblo paraguayo siente que es posible terminar con el monopolio del poder y de la violencia de la post-dictadura stroessnista. Es la esperanza luchando contra el miedo. Del lado de las bandas criminales que usurpan “democráticamente” el poder, resulta exasperante la apelación a las amenazas, para que el miedo tenga la última palabra. Se han acentuado las políticas de criminalización de las fuerzas sociales que podrían sostener un proceso de cambios profundos.

Cuando el libro esté en sus manos, el resultado de las elecciones ya estará claro, y en cualquiera

de sus variantes, entiendo que es necesario reflexionar sobre este tema. Porque sus efectos seguirán gravitando sobre el escenario político paraguayo. Y porque la posibilidad de cambios en el Paraguay, de que se abra o no un proceso de movilización popular, es fundamental para todos los pueblos de América Latina.

Actualmente Colombia y Paraguay, son los países más cercanos a las políticas del gobierno norteamericano. Desarticular, o al menos cuestionar las relaciones del bloque de poder paraguayo con la fuerza hegemónica de los EE.UU. permitirá crear condiciones para un nuevo nivel de integración del continente.

Por eso mismo, se vuelve más grave que un gobierno como el argentino, que ha hecho bandera de la defensa de los derechos humanos, y de la integración latinoamericana, se haya prestado para actuar como escenario de esta trampa. Cuando los campesinos paraguayos fueron a pedir refugio a la embajada argentina en Paraguay, se les sugirió que lo solicitaran directamente desde nuestro país. Y en el momento en que lo estaban haciendo, los detuvieron.

Si existe una deuda impagable de los argentinos, por la vergonzosa participación de nuestro país en la guerra del Paraguay, si existe otra deuda impagable por el secuestro de hombres y mujeres paraguayos en la Argentina, como parte del Plan Cóndor (entre ellos Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo), si existe una deuda que debe pa-

garse con urgencia, que es la que surge de las condiciones desiguales e injustas con que se construyó y se explota la energía producida por Yacyretá, existe la posibilidad de revertir con urgencia esta situación, liberando a los presos políticos paraguayos, y otorgándoles refugio en la Argentina.

Es algo que debe movilizar de una vez la conciencia de quienes nos consideramos comprometidos política y éticamente con la integración latinoamericana, los derechos humanos, la liberación de los pueblos.

Quiero decir finalmente, que visité varias veces a los compañeros presos. No es la primera vez que visito presos políticos, de manera que he aprendido que estas instituciones, las cárceles, que el poder utiliza como lugar de destrucción de las subjetividades de las personas que resisten, suelen transformarse en lugares de creación de contrapoder. Me refiero a que en lugar de destruirse las subjetividades de estos luchadores, ellos han venido sosteniendo su integridad de una manera conmovedora, y nos han enseñado a quienes tenemos la oportunidad de visitarlos, verdaderas lecciones sobre la historia del Paraguay, sobre su realidad actual, sobre la vida campesina y las luchas históricas. Los compañeros no han dejado un día de estudiar, y de prepararse para poder luchar mejor junto a su pueblo. También han sabido escuchar, preguntar, debatir, como es habitual en la fraternidad revolucionaria.

Con Agustín, en especial, he debatido varios textos que publicamos, y así pudimos dialogar sobre temas tan diversos como la lucha antiimperialista, o los aportes del feminismo al proceso emancipatorio. Hablamos del machismo, de las muchas maneras en que se multiplican las opresiones sobre nuestros cuerpos. Las muchas cárceles que tendremos que abrir, para que exista un tiempo en el que tome un peso verdadero la palabra libertad.

Este libro da cuenta de las búsquedas políticas, de las reflexiones teóricas y prácticas de los compañeros. A mí me causa una gran emoción, poder editarlo. Tal vez al leerlo, encontremos no sólo razones para asumir con energía la batalla por la libertad de los compañeros, sino también, para crear las condiciones de nuestra auténtica liberación.

Prólogo

Stella Calloni

“Ningún pueblo, como ninguna persona, puede llegar a esconder impunemente bajo la alfombra la basura de la memoria. La única manera de superar el pasado consiste en enfrentarlo, en verlo como fue y cómo el miedo nos obliga a decir que fue”. Eduardo Galeano

De eso se trata este prólogo o introducción para el libro “Reflexiones políticas desde la Cárcel”, del detenido político paraguayo en Argentina Agustín Acosta. De eso y de la verdad. En su relato sobre los motivos por los cuales está en la cárcel junto con Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Jiménez González y Gustavo Lescano Espínola, otros cinco compañeros de lucha, Agustín Acosta, recorriendo su vida, cuenta la historia de su pueblo.

Excelente relato, que nos abre las puertas a un

mundo que se desconoce, como se desconoce la historia de Paraguay. Pero también en la “Presentación” revela la disciplina revolucionaria de quienes en una cárcel de máxima seguridad, adonde fueron llevados sin razón alguna, ocupan su tiempo en estudiar y escribir, para luchar contra la desmemoria y la mentira, para mostrar la soledad de ese pueblo sufriente, que espera justicia desde siglos.

Habla de la lucha por la tierra y su significado en ese Paraguay, de la injusticia de latifundios y monopolios, pero también de la eterna rebelión campesina.

“La tierra para nosotros, como campesinos, es parte de nuestro modo de ser, es nuestra vida, es la madre que nos da todo. Esta manera de entender y relacionarnos con la tierra contrasta profundamente con la realidad que ha impuesto el capitalismo. La lucha es contra el modelo económico paraguayo, basado hoy en la agroexportación, el comercio ilegal y la triangulación comercial sólo beneficia a una pequeña elite en el poder (constituida como clase hegemónica por el latifundio ganadero: los agroexportadores de soja y algodón, la clase contrabandista, la burocracia estatal, el capital especulativo financiero, las empresas constructoras ligadas al Estado prebendario, etc.), que excluye a millones de paraguayos. Toda la acumulación económica se concentra en esta pequeña elite, generando en el otro polo de la sociedad miseria y pobreza, derivada en una aguda lucha de clases, especialmente entre el pe-

queño productor campesino y el capitalismo mercantil agrario”.

Así en esta “Presentación” Acosta desarrolla un ensayo muy importante, después de su testimonio tan hermosamente colectivo, para entender lo que hoy está sucediendo en su país.

En el capítulo donde encara las “Reflexiones Políticas”, analiza y valora la lucha de las organizaciones campesinas. Y allí menciona los objetivos del movimiento Patria Libre (PL) para incorporarse a la lucha en Paraguay, legalmente. Es evidente que su vinculación con el campesinado ha sido uno de los precios más duros pagados por PL.

Como dice el autor de este libro, Patria Libre ha recibido “un duro golpe represivo que ha desarticulado prácticamente a nuestra organización, porque estábamos en etapa de acumulación de fuerzas”. Los cuadros políticos más importantes en el desarrollo del trabajo ideológico fueron perseguidos. Todo esto también alcanza al aguerrido movimiento campesino en Paraguay.

Por eso éste es un libro clave para entender las injusticias actuales, las luchas heroicas y solitarias, para aprender de estos hombres detenidos ilegalmente cuando buscaban refugio en nuestro país, el ejemplo de su conducta de vida cotidiana, de su fuerza y su disciplina, de su valor para crecer y ofrecer textos como éste, de enorme valor y lucidez en estos tiempos difíciles y confusos. Y también poesía popular desde esa cárcel de máxima seguridad, que para afrenta del pueblo ar-

gentino, deben compartir con los responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar.

Creo que es importante también para los lectores recordar la historia olvidada de Paraguay, y los sucesos que llevaron prisioneros a estos jóvenes hombres que aman a su pueblo y lo demuestran en cada hora de su vida.

Por eso he trabajado esta presentación reuniendo y sistematizando algunos datos que la memoria colectiva no puede sepultar en el olvido, porque es la historia de un pueblo hermano.

Paraguay. Pequeña historia y contexto

Para entender cómo se llegó a esta situación, vivida por los seis campesinos paraguayos, es necesario hacer un breve recorrido por la historia de Paraguay.

Destruído en la guerra de La Triple Alianza (1865 a 1870) por los ejércitos y las oligarquías de tres países vecinos Argentina, Brasil y Uruguay, y por imposición de la Corona Británica, la historia del Paraguay es el ejemplo de lo que significó el colonialismo en Sudamérica.

Fundada en 1537, la ciudad de Asunción fue el nudo vital desde donde partían las expediciones de los colonialistas españoles hacia los territorios que integraban el Virreinato del Río de la Plata, cuando aún pensaban encontrar oro y plata en cantidad.

La falsa ilusión se perdió, y entonces Montevideo y Buenos Aires fueron las sedes de poderosas oligarquías coloniales como intermediarias. Alrededor de Asunción proliferaron los latifundios precapitalistas. Y allí los jesuitas de la Compañía de Jesús organizaron misiones donde los indígenas trabajaban la tierra comunitariamente, en un sistema que fue calificado como “comunista” en esa época.

La expulsión de los jesuitas en 1767 significó otro genocidio, agregado al de la conquista y colonización, y los indígenas pasaron a ser esclavos tanto en los cañaverales de Brasil o de los latifundistas locales y vecinos.

Es hasta hoy asombrosa la historia de la resistencia así como los detalles de la revolución de los comuneros en Paraguay. Todo eso estaba detrás del surgimiento de gobernantes como Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y el hijo de este Francisco Solano López, en una continuidad de características también extraordinarias. Paraguay lo desafiaba todo. Su desarrollo fue independiente de la corona británica, que dominó rápidamente a las independizadas repúblicas de España, aquí en el sur.

El pequeño país mediterráneo era una potencia económica con control estatal sobre su producción agrícola (maderas finas, yerba mate y otros), sobre los primeros ferrocarriles, telégrafos y fundiciones, el más avanzado de América del Sur. Paraguay también tuvo la primera imprenta.

Eso indujo a Gran Bretaña a impulsar la inva-

sión con las tropas de la llamada Triple Alianza en 1864. Había que desaparecer el ejemplo de un país que se regía por sus propias decisiones. Gaspar de Francia aisló a Paraguay para preservarlo de las ambiciones británicas y otras. Paraguay pagó el precio de demostrar en aquellos tiempos que un país podía ser independiente.

Cuando comenzó esa invasión, que tuvo una heroica resistencia -vale recordar que los últimos resistentes eran niños-, Paraguay tenía más de un millón 250 mil habitantes. Cuando terminó la cruel e injusta guerra en 1870, la población que sobrevivió no sumaba los 300 mil. Los invasores se quedaron con más de 125 mil km² de tierras arrebatadas a los vencidos. Fue un genocidio que marcaría para siempre la historia de ese país y de América. Los sobrevivientes eran mujeres, niños muy pequeños y ancianos.

Esa guerra colonialista dejó al país sumido en la miseria. Todo fue destruido en Paraguay, uno de los países más ricos del continente.

Habían pasado 60 años desde el final de la Guerra de la Triple Alianza, cuando una disputa por intereses coloniales de petroleras extranjeras, llevó a enfrentar a dos países hermanos y víctimas ambos del genocidio colonial en lo que se conoció como la Guerra del Chaco (1935), un episodio terrible que fue narrado con maestría literaria por el gran escritor paraguayo y universal Augusto Roa Bastos. Paraguay venció, pero perdió más de 50 mil hombres.

¿Cómo no recordar esa historia a grandes rasgos

para determinar lo que sufrió ese pueblo heroico ante las terribles injusticias nunca reparadas?

De esa vieja impunidad se favorecería el dictador Alfredo Stroessner -ya fallecido-, quien llegó al poder mediante un golpe en 1954, después de que en 31 años se sucedieron 22 presidentes y habían aparecido fermentos revolucionarios, como sucedió en 1947. Stroessner fue apoyado por Estados Unidos, que en ese mismo año invadió Guatemala para derrocar al popular gobierno de Jacobo Arbenz.

El dictador paraguayo fue clave en el Cono Sur para las actividades de la inteligencia estadounidense, y por eso la cruel tiranía perduró durante 35 años de horror y muerte. Miles de paraguayos fueron asesinados, otros torturados, perseguidos y miles y miles partieron al exterior para salvar sus vidas. Luego como consecuencia de la injusticia del régimen se produjo un exilio económico masivo.

En 1989 y -contado esto a grandes rasgos- como había nuevos diseños de Estados Unidos para montar pseudo democracias después de las dictaduras genocidas que impuso en el continente, se fraguó otro golpe militar. El consuegro de Stroessner, el general Andrés Rodríguez lo llevó a cabo en febrero de ese año usando el mejor estilo gatopardista de “cambiar algo para que nada cambie”.

Stroessner fue al exilio en Brasil y jamás pagó sus culpas, entre las que figuraban no sólo los crímenes contra su población, sino operaciones

como Cándor, a la que dio vida junto al dictador Augusto Pinochet en los años 74-75. Hay que recordar siempre que las relaciones estrechas de Estados Unidos con Stroessner -a quien la CIA consideraba “su hombre” en el Cono Sur, cuando presentaba a ese gobierno dictatorial como un modelo de “democracia viable” en la región- fue clave para instalar otras dictaduras y para apoyar los esquema de la contrainsurgencia criminal en la región. El dictador tuvo entre sus récords haber mantenido a los presos políticos más antiguos del continente en su momento. Stroessner - por ejemplo-, fue decisivo para las necesidades de la CIA en sus preparativos para derrocar al presidente de Chile Salvador Allende y cualquier otro proceso popular.

Rodríguez llamó a elecciones, pero siempre bajo su control y del gobernante Partido Colorado, aunque no pudo impedir la presión popular que había despertado el alejamiento de Stroessner, lo que hizo aparecer movimientos diversos y especialmente en el sector campesino, uno de los más castigados por la represión, ya que sus organizaciones intentaron enfrentar al dictador.

De todo esto que hemos resumido de la historia del Paraguay nada se sabe. “Paraguay es una gran cárcel olvidada” escribió el profesor Martín Almada, descubridor de los archivos del terror en diciembre de 1992.

Aquel Paraguay diezmado por la conquista y colonización, por el genocidio de la Guerra de la Triple Alianza, de la que nunca se habla, y por la

Guerra del Chaco, también lo fue por la feroz dictadura pro norteamericana de Stroessner. El seudo proceso “democrático” que le sucedió significó la impunidad en todos los planos, y eso se observó en los intentos de golpes y maniobras políticas y mafiosas, cuyo símbolo son los asesinatos de jóvenes estudiantes, el magnicidio en la figura de uno de los hombres del partido colorado, base política de la dictadura, por peleas internas. Pero también es la tragedia que viven los campesinos, que han producido extraordinarias manifestaciones a pesar de que el aparato del terror oficial nunca ha sido desmantelado. Actualmente casi el 80 por ciento del campesinado de Paraguay es pobre, debido a la actividad empresarial extranjera y a los latifundios extranjeros también.

Historia de una injusticia

En febrero de 2005 asistimos a una nueva tragedia en Paraguay. El 19 de febrero escribí para el periódico La Jornada de México, del cual soy corresponsal en Sudamérica, que el secuestro y asesinato de la joven Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay, Raúl Cubas, no sólo tendría repercusiones en ese país sino que el trágico suceso intentaría -una vez más- ser utilizado para los proyectos de Estados Unidos en la región.

Así fue. Por esos días el gobierno de Paraguay inició una purga masiva contra la policía por “en-

torpecer” y desviar las investigaciones sobre este caso. Se trataba de armar un falso caso que pudiera “ayudar” a la CIA de Estados Unidos a crear una presunta red terrorista, que permitiera reprimir los movimientos que buscan justicia en ese país.

Aunque la sospecha más acertada se dirigía precisamente a sectores corruptos de las fuerzas de seguridad y las luchas internas del Partido Colorado, que habían costado en su momento la vida al vicepresidente Luis María Argaña, algunos fiscales intentaban ligar este hecho a sectores de izquierda y, aunque pareciera increíble, a las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Fue en la embajada de Estados Unidos en Paraguay donde se tejió esa hipótesis -tal cuál lo informé al periódico La Jornada-, y ya por esos momentos, sin haber establecido ninguna responsabilidad, se hablaba de “la necesidad de una reunión de los países del sur para avanzar en acuerdos antiterroristas”, mientras se recrudecían las presiones por el tema de la Triple Frontera que une a Brasil, Paraguay y Argentina, “zona estratégica” que Washington intenta poner bajo su control.

La joven Cecilia Cubas de 31 años fue secuestrada en septiembre de 2004 en un importante operativo muy cerca de su casa, y su cadáver fue encontrado el 16 de febrero de 2005 en una finca cercana a la capital paraguaya, después que su familia había pagado 800 mil dólares. El operati-

vo de secuestro evidenciaba que existió “zona liberada”.

En esos días se acusó también a policías de haberse apropiado de una buena cifra de ese dinero, en medio de una severa crisis institucional con golpes, contragolpes de uno y otro bando, que resultó en uno de los cuadros más difíciles después de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), una de las más criminales y corruptas de la región.

La impunidad permitió que las estructuras strossnistas continuaran prevaleciendo en la institución policial, fuerzas armadas y otros espacios del poder, donde se habla de “verdaderos feudos intocables”. En Paraguay, ante el secuestro de la joven Cubas, nadie dudaba de intervención de sectores policiales en el hecho. Sin embargo, a partir de fines de 2004 y a pesar de todos esos antecedentes, el ministro del Interior, Nelson Mora; el jefe de Policía, Carlos Zelaya, y el fiscal general Oscar Latorre, comenzaron a insistir en endilgarle el secuestro al Movimiento Patria Libre, e incluso mencionaban que sus miembros habían sido “entrenados” por las FARC.

No sólo eso. Llegaron a acusar a Rodrigo Granda, el llamado “canciller” de las FARC, quien fue secuestrado en Venezuela el 13 de diciembre de 2004 y trasladado a Colombia ilegalmente, originando un fuerte conflicto diplomático entre las dos naciones.

Para establecer esta relación hablaron de un video, evidentemente falso y burdo, con el que de-

mostrarían que supuestamente las FARC “enseñaban” a militantes de Patria Libre a “secuestrar”.

Asimismo el fiscal Latorre acusado ya por sus maniobras oscuras anteriormente mencionaba también “un cruce” de correos electrónicos entre esas organizaciones. Pero mantener contactos con las FARC, y cambiar mensajes, era un hecho común, ya que esa organización mantenía relaciones políticas en todo el mundo con distintos partidos, organismos y gobiernos, y por eso tenían -y tienen- representantes que dialogan con diversos Estados. De hecho en las negociaciones de paz en ese país, se les reconocía como fuerzas beligerantes.

En Paraguay, en tanto, analistas importantes mencionaban la existencia de una banda, en la que participarían miembros de la policía y las estructuras del Estado (paraguayo), que ya habían realizado secuestros de familiares de políticos, la mayoría enriquecidos por la corrupción. Pero nadie investigó esa línea.

Además, existe un antecedente muy significativo. En enero de 2002 la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), y otras organizaciones de la sociedad civil paraguaya, solicitaron firmas para llevar a juicio político al mismo fiscal Oscar Latorre y al Presidente de la República, entonces, Luis Ángel González Macchi, acusados de delitos de lesa humanidad por el secuestro y tortura de los militantes de Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí.

A ambos se intentó acusarlos del secuestro de María Edith, nuera de Enzo Debernardi, ex ministro de Hacienda paraguayo, al que se le calculaba una fortuna de más de 800 millones de dólares. Arrom y Martí fueron secuestrados el 17 de enero de 2002 y torturados durante 14 días, lo que cesó cuando su familia y organismos humanitarios lograron localizarlos por diversos informes, en una casa en las afueras de Asunción controlada por policías, que se reconocieron como una Unidad Antiterrorista.

Cuando los encontraron, ambos dirigentes estaban en graves condiciones por las torturas, quemaduras y golpes. ¿Que se querían de ellos?

En entrevista con la Jornada unos meses después de su liberación Arrom, -quien mostraba aún las huellas de las torturas- relató que se intentaba “comenzar una persecución contra organizaciones de izquierda”. Contó que fueron secuestrados y “torturados en forma constante” y que fue “también llevado a un río donde me hundían la cabeza hasta la asfixia. Utilizaron el submarino, y todos los elementos de tortura. Querían forzarnos a firmar una declaración aceptando que habíamos secuestrado a una persona, y que esto era parte de un plan para desestabilizar al país. A los cuatro días de estar siendo torturados nos dijeron que estábamos en manos de la Secretaría Antiterrorista y que teníamos como opción desaparecer o negociar con ellos. También nos amenazaron con entregarnos a asesores chilenos, argentinos y brasileños, y dijeron que ellos tenían otros métodos de torturas”.

El plan policial era evidente: lograr una declaración de ambos, y luego asesinarlos en una supuesta fuga, ya que el gobierno decía que estaban prófugos. O simplemente desaparecerlos, después de lograr su objetivo: una confesión bajo torturas. Ahora ambos dirigentes están refugiados en Brasil. Pasado un tiempo se encontraron en Paraguay indicios de que en el secuestro de María Edith, habrían participado familiares indirectos como entregadores.

En el caso de Cecilia Cubas, el intendente, el comisario y los vecinos de la casa de la localidad de Ñemby, también surgieron indicios que no se quieren reconocer. En el lugar donde fue encontrado el cadáver de la joven los vecinos habían alertado sobre movimientos extraños desde diciembre de 2004 e incluso filmaron la presencia de vehículos muy similares a los utilizados por la policía. El subcomisario de Ñemby fue desplazado cinco días después de haber informado esto. El fiscal Latorre dice que la casa en la que se encontró el cuerpo pertenece a Manuel Cristaldo Mieres, a quien sindicó como miembro de Patria Libre.

Para todos los analistas más serios resultaba burdo que “los dirigentes de Patria Libre pidieran consejos y asesoramiento por correo electrónico a Rodrigo Granda, para saber cómo negociar con la familia”. La analista paraguaya Nilda Rivarola opinó en su momento que los secuestradores pudieron “haber obtenido protección de parte de fuerzas corruptas” y que además “está claro que

después de este asesinato se va a empezar a reprimir y a encarcelar a todo el mundo” en Paraguay, donde los movimientos de campesinos son muy poderosos y activos.

Estados Unidos tenía que justificar su presencia militar y de inteligencia en la zona de la Triple Frontera. Incluso hasta las cancillerías de Paraguay y Colombia se comunicaron para pedir que Rodrigo Granda fuera extraditado, a lo que la canciller colombiana en ese momento, Carolina Barcos, dijo no oponerse.

El embajador de Estados Unidos en Paraguay, John F. Keane intervino todo ese tiempo con una descarnada injerencia al sostener que su gobierno creía que las evidencias que proporcionaba el fiscal general del Estado “son contundentes”. Dijo también que el Ministerio Público del Paraguay cuenta con informaciones proporcionadas por el gobierno colombiano, que indican “que hay vínculos directos entre los guerrilleros colombianos y los involucrados en el secuestro y asesinato” de Cubas, y que su gobierno considerará cualquier “pedido de apoyo” de Paraguay en este caso.

¿Cómo se llegó a la persecución de Patria Libre en el caso Cubas, lo que llevaría a la polémica y extraña detención de los dirigentes campesinos en Argentina, quienes desde mediados de febrero de 2006 están alojados en el Complejo Penitenciario Federal N°2 de la localidad de Marcos Paz, como si fueran delincuentes peligrosos?

Los campesinos paraguayos fueron imputados por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas,

hija del ex presidente paraguayo. Pero esta acusación no fue acogida favorablemente por el juez del proceso en Paraguay, el Dr. Pedro Mayor Martínez.

A pesar de haberse presentado voluntariamente ante el Juez de la causa tantas veces como lo consideraron oportuno, nunca fueron indagados por el delito que ahora es objeto del pedido de extradición. “Jamás el magistrado incriminó a los campesinos presos por los que ahora reclamamos”, afirmaron en una carta al entonces presidente de la Argentina Néstor Kirchner y a la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2007, organismos humanitarios y personalidades de Argentina.

Se recordaba que en el año 2006 los cinco militantes de Patria Libre y uno del Movimiento Agrario y Popular de Paraguay fueron a la embajada Argentina en Asunción pidiendo refugio. Allí les dijeron que vinieran a nuestro país que los recibirían. Y así lo hicieron. Acompañados con su abogada, se presentaron ante el organismo argentino encargado del refugio, CePaRe (integrado por el Ministerio del Interior, la Cancillería y el Ministerio de Justicia) donde hicieron conocer su situación.

“Luego del trámite en el CePare, aparece una orden de procesamiento y detención por parte de una autoridad judicial que no es el Juez natural de la causa y por tanto violatoria de las mas elementales normas del Derecho a la Defensa en juicio, en virtud tanto de las leyes paraguayas

como argentinas. Esta resolución se emite sin que antes hubieran podido ejercer su derecho a la defensa”, denunciaban los organismos de Derechos Humanos.

El 14 de diciembre de 2006 el juez Ariel Lijo falló a favor de la extradición de los campesinos. “El magistrado trabajó para disminuir a su mínima posibilidad el derecho de la defensa, desestimando pruebas y testigos fundamentales. Y luego en su fallo terminó diciendo que la prueba ofrecida no alcanzaba para demostrar la persecución política de que son objeto los campesinos en Paraguay”, señalaron organismos humanitarios en sus demandas.

Martín Almada Premio Nobel Alternativo de la Paz, presentó las pruebas concretas de que los seis campesinos, son acusados sin pruebas. No se lo escuchó.

Existen más de 200 campesinos asesinados en Paraguay en los últimos años. En mayo de 2005 se resolvió conceder inmunidad a las tropas de Estados Unidos, en ese país, de donde nunca se fueron. Las milicias pertenecen a las Fuerzas Especiales de inteligencia, especialistas en contrainsurgencia, la misma que se aplicó en el esquema de las dictaduras del Cono Sur.

“Entendemos que conceder la extradición constituiría una tremenda injusticia para con estas humildes personas y sus familias puesto que les esperaría en Paraguay un proceso arbitrario, parcial y cargado de preconceptos respecto de la militancia política a la que se encuentran ads-

criptos”, escribieron los organismos humanitarios aquí. También afirmaron que de concretarse la extradición, serían sometidos a torturas y arbitrariedades, tanto ellos como sus familias, de la misma manera que ha sucedido con otros militantes de su misma organización detenidos en aquel país.

Pero además, la existencia de la Ley Antiterrorista, impuesta también por orden de Estados Unidos representa un enorme peligro para la vida de los campesinos paraguayos, indebidamente presos en Argentina. Los organismos humanitarios pidieron al gobierno en agosto de 2007 que se rechazara la extradición de los seis campesinos paraguayos presos en Argentina.

“Tal como podrá verificarse en la causa que tramita ante ese Alto Tribunal, estos cinco campesinos militantes integrantes de un partido legalmente reconocido en Paraguay como es el Partido Patria Libre y uno del Movimiento Agrario Popular, jamás fueron objeto de llamados a indagatoria por delito alguno en su país”, dicen en la carta dirigida a la Corte Suprema.

Los datos de la realidad

El 27 de julio de 2006 el presidente de Estados Unidos George W. Bush solicitó al Congreso una ley para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que forme una fuerza militar anti-terrorista en la Triple Frontera (Argentina, Brasil

y Paraguay), lo que fue denunciado en Sudamérica como una nueva intromisión que apunta a agravar la situación creada por la presencia de tropas estadounidenses en Paraguay.

Esto provocó denuncias de organismos humanitarios que repudiaron el nuevo intento imperialista para acentuar la militarización de la región, con todas sus nefastas consecuencias para la vida de nuestros pueblos.

“No queremos los efectivos militares de la OEA en la Triple Frontera y exigimos el retiro de todas las tropas extranjeras, que representan un proyecto integral de dominación violatorio de la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos”

Los intentos de instalar una base en la llamada Triple Frontera, en la que participan activamente las inteligencias de Estados Unidos e Israel, están basados en argumentos falsos -como los usados para invadir Irak-, sosteniendo que en Ciudad del Este está la organización libanesa Hezboallah, a pesar de que ésta nunca actuó fuera de su territorio.

Hay una cantidad de argumentos falsificados en este caso tendientes a involucrar a esa zona estratégica, debajo de la cual además está una de las más grandes reservas de agua dulce del mundo: el acuífero Guaraní, en la guerra supuestamente antiterrorista. No es otra cosa que aplicar el terrorismo contrainsurgente del imperio a nuestros pueblos y territorios.

Estados Unidos intenta armar un escenario en

la región para obligar a todos a someterse a sus demandas de alineamiento total a las doctrinas de guerra antiterrorista y preventiva con que están avanzando sobre el mundo y especialmente Medio Oriente.

La decisión de Bush se produjo unos días después de que varias organizaciones y analistas que participaron en una Misión Internacional de Observación sobre las actividades de las tropas estadounidenses en Paraguay, advirtieron sobre las graves consecuencias de esa presencia que ya está dejando víctimas en ese país.

El objetivo de la Misión fue verificar la situación del pueblo paraguayo a partir del establecimiento (mayo 2005) de la Ley 2594 que otorga inmunidad a los efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos para lo cual recorrieron distintos lugares de ese país recibiendo denuncias e información de la población afectada.

Sus conclusiones revelan desde actividades militares, policiales y paramilitares para reprimir campesinos, violaciones de mujeres en las actividades de Acción Cívica (en realidad contrainsurgencia) y otros. Se registraron las desapariciones en las zonas rurales y unos dos mil campesinos sometidos a proceso, mientras se producen desalojos, quemas de viviendas, violaciones, torturas y asesinatos.

En la llamada acción “Medretes” donde las tropas estadounidenses aparentemente atienden sanitariamente a población rural (Acción Cívica), se registró la entrega de medicamentos sin control,

que se asocian a una gran incidencia en hemorragias y abortos en las mujeres atendidas y además coincide con hechos de violaciones a mujeres jóvenes.

“Los testimonios indican que los ejercicios MEDRETES, además de ofrecer consultas médicas, incluyen operaciones adicionales de filmación del lugar, infiltración en las comunidades y recolección de datos”, mientras las tropas estadounidenses entrenan a cuerpos de seguridad paraguayos. Todo esto en momentos en que la militarización del campo se agrava, al regir el decreto 167 del año 2003 que autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la Policía nacional.

El ejército de Estados Unidos también está relacionado “con la creación de cuerpos de seguridad inconstitucionales” como los Consejos y Comisiones de Seguridad Ciudadana que son cuerpos combinados policiaco-militares y están señalados como autores de las represiones, desalojos, violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas.

“En Yvy Ja'u, de acuerdo con lo observado, la desaparición forzada del periodista Enrique Galeano, no es sino el último evento de este tipo registrado en el lugar. La Misión tuvo informes de 49 muertos y varios desaparecidos por lo menos en los últimos dos años. (...) Además de intimidar a la población campesina, los militares realizan actividades de fragmentación comunitaria y proselitismo político”. Se denuncia que “Los empre-

sarios sojeros se valen de una empresa denominada Guardias Rurales S. A. para realizar las expulsiones y apoderarse de las tierras campesinas, a tal punto que se habla de ‘zonas liberadas’ donde las fuerzas del Estado no intervienen”.

A los desalojos y asesinatos “se reporta una alta incidencia de morbilidad derivada del uso masivo de agrotóxicos con registro de muerte”. Pero también existe ya una campaña para inventar “presencia guerrillera” que no existe en zonas campesinas. En este caso se menciona al dirigente Tomas Zayas miembro de organizaciones campesinas “a quien se ha intentado vincular con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a través de la construcción de un testigo mediante soborno, sin que se haya podido aportar ninguna prueba fundamentada en su contra”.

Este informe falso llevó a operativos “de persecución y hostigamiento” e incluso se habló de un presunto e inexistente “foco guerrillero en el departamento de Concepción” aunque algunos jefes policiales sostuvieron que no existen “guerrilla ni actividades subversivas”.

Se citó también la existencia de la pista de tres mil 800 mts. de largo para el aterrizaje de naves como los Galaxy o B 52 de Estados Unidos. Los entrevistados en Mariscal Estigarribia señalaron que “funcionarios estadounidenses, civiles y militares de alto rango, incluido el embajador de Estados Unidos” visitan permanentemente el lugar. Durante el trabajo de la misión se comprobó la presencia de las oficinas de prensa en la embaja-

da (USAID) y “sus vínculos con las principales organizaciones civiles que trabajan con la población local y con la Municipalidad, lo que preocupa porque se conoce su relación histórica con las dictaduras militares”.

Además los observadores debieron pasar por retenes que solicitan documentos a los que viajan a las zonas campesinas y notaron la presencia de militares con armas largas” en la escuelas. También se observaron las tareas de espionaje en las áreas marginales urbanas utilizando las Comisiones de Seguridad Ciudadana “en actividades que corresponden a las funciones de los cuerpos policiales y para fines relacionados con la fragmentación social”.

Ésta es la realidad de Paraguay, donde el pueblo sigue siendo víctima de la miseria, la injusticia y el terror. Por luchar contra esa tragedia que agobia a un pueblo que lucha por justicia y dignidad desde más de 500 años atrás, es que están presos los seis detenidos paraguayos. Y por eso nuestro deber es lograr -como mínima respuesta a la injusticia- su liberación urgente. Y agradecer lo que ellos nos enseñaron con su ejemplo y con libros como éste.